Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de fecha doce (12) de marzo de dos mil veinticinco.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión **03813/INFOEM/IP/RR/2024,** promovido por **XXXX**, a quien en lo sucesivo se le identificará como **RECURRENTE**, en contra de la respuesta del **Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios,** en lo sucesivo el **SUJETO OBLIGADO**, por lo que se procede a dictar la presente Resolución, con base en los siguientes:

# **A N T E C E D E N T E S**

1. El día **catorce de mayo de dos mil veinticuatro**,se presentó ante el Sujeto Obligado vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en adelante SAIMEX, la solicitud de información pública **00427/ISSEMYM/IP/2024**:

*“solicito se me informe cuántos contratos de obra pública y cuántos de adquisición de servicios se llevaron por el Instituto del año 2021 a la fecha, también de conformidad con el artículo 12.72 del Código Administrativo vigente en el Estado de México, se proporcionen los nombres, los oficios de encomendación o asignación de tareas/funciones de las personas que hayan tenido bajo su responsabilidad la residencia y/o la supervisión de obras públicas, la revisión de precios unitarios, así como la cédula profesional de los mismos, así también de estos servidores públicos, solicito se me proporcione constancia de haber acreditado el procedimiento de evaluación de confianza ante la secretaría de la contraloría.”*

* Se eligió como modalidad de entrega de la información: A través del **SAIMEX.**

1. El día **cuatro de junio de dos mil veinticuatro**,el **SUJETO OBLIGADO** solicitó una prórroga para atender la solicitud de información por un periodo de siete días adiciones; adjuntó para tal efecto el archivo denominado ***RESOLUCIÓN 427 IP.pdf***, cuyo contenido corresponde al Acta del Comité de Transparencia CT/ISSEMYM-A03-25E/2024, a través de la cual se aprueba la ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud de información, en razón de que se continúa con la búsqueda e integración de la información.
2. El **trece de junio de dos mil veinticuatro**, el Sujeto Obligado emitió su formal respuesta a través de seis archivos electrónico a saber:

**RESPUESTA 427.IP.pdf,** que contiene un oficio signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, a través del cual informa de dos enlaces proporcionados por el servidor público habilitado de la Coordinación de Administración y Finanzas, en donde obran los resultados de procedimientos de licitación pública e invitación cuando menos a tres personas y de procedimientos de adjudicación directa realizados; un cuadro de total de contratos de los ejercicios 2021 a 2024; relativo a los oficios de asignación de funciones, se informa que se adjunta copia simple; de la cedula profesional de residentes de obras públicas, se informa de los que sí fueron localizado soporte documental al respecto mediante cuadro con el listado de nombres.

**RESOLUCIÓN 427.IP 30 EXTRAORDINARIA.pdf,** que corresponde al Acta del Comité de Transparencia CT/ISSEMYM-A01-30E/2024, mediante la cual se aprueba la clasificación de información confidencial contenida en las cédulas profesionales.

**MONTERO GONZALEZ RICARDO\_Censurado.pdf,** que corresponde a la versión pública de una cedula profesional.

**OFICIOS DE DESIGNACIONES.pdf,** que corresponden a noventa oficios de asignación de funciones.

**OROZCO VAZQUEZ GABRIEL VERSIÓN PÚBLICA.pdf,** que corresponde a la versión pública de una cedula profesional.

**SALDAÑA CONTRERAS CÉSAR ALEJANDROVERSIÓN PÚBLICA.pdf,** que corresponde a la versión pública de una cedula profesional.

* **Las razones o motivos de contratación de la servidora pública señalada, así como sus funciones.**

1. El **veintiuno de junio de dos mil veinticuatro**, el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta, realizando las siguientes manifestaciones:

* **Acto impugnado:** *“respuesta a la solicitud”*
* **Razones o Motivos de inconformidad:** *“las causas por las cuales me inconformo son varias aunque la plataforma solo me permite seleccionar una. toda vez que la información que me proporcionan no es legible. el listado de los servidores públicos que me proporcionan, ademas de que no me entregan la información que solicito de estas personas, omite el total de los servidores públicos que se encargan de la ejecución de las obras, pues yo como superintendente tuve asignados otros residentes, de los cuales tengo duda que hayan pasado un control de confianza derivado de sus prácticas, mismo que se podrá corroborar revisando la firma de las bitácoras de obra del total de los contratos adjudicados en la temporalidad que solicito. así como también se podrá corroborar preguntando en la dirección y subdirección a la que pertenece la ejecución de las obras a cargo el issemym. por la parte donde dice la DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PERSONAL que no es un procedimiento oficial, le doy la razón pues es evidente que quien debe de solicitarlo es la persona que le designa las tareas de residente, siendo este la para esa subdirección o la dirección de obra, por lo que acuso al responsable de realizar la búsqueda exhaustiva de no haberla realizado porque tuvo que haber girado oficio a todos los que pudieran tener algún indicio de la información, que de manera obvia es el lugar de adscripción de estos servidores públicos que se les encomienda la tarea de residentes. Estoy inconforme porque quiero que se me diga si existe o no la información que pido, pues me he visto en situaciones donde me he sentido vulnerado por la figura del residente, me he sentido que han querido sacar ventaja de la condición que tienen, incluso dañado por sus omisiones en el desempeño de sus funciones hasta denotar que requieren un incentivo. Al sistrema saimex en mi calidad de ciudadano, pido sean suplidas todas las deficiencias por mi desconocimiento del uso del sistema, requiriendo la infromación que solicito ante a quien resulte responsable de ocultar de manera ventajosa mi requerimiento.”* (Sic)

1. El **veintiséis de junio de dos mil veinticuatro**, se admitió a trámite el Recurso de Revisión y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción II de la ley de la materia, se acordó a las partes a efecto de que en un plazo máximo de siete días, el Recurrente manifiesta lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas y alegatos y el Sujeto Obligado presentará el Informe Justificado.
2. El **SUJETO OBLIGADO** en fecha **cinco de julio de dos mil veinticuatro** rindió su informe justificado agregando como elemento novedoso la lista de nombres de los residentes de obra por contrato y del responsable de precios unitarios relativos a los contratos y del responsable de precios unitarios relativos a los contratos de obra pública llevados a cabo por el ISSEMYM del año 2021 a la fecha de la solicitud; asimismo adjunta los oficios generados por los servidores públicos habilitados confirmando sus respuestas iniciales, destacando que el contenido en el archivo de nombre ***8. OFICIO 913 DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONTROL PATRIMONIAL.pdf***, obra el listado de nombres de los residentes de obra por contrato y del responsable de precios unitarios relativos a los contratos de obra pública llevados a cabo por el ISSEMYM del año 2021 a la fecha de la solicitud signado por el Director de Obras y Control Patrimonial; asimismo en el archivo ***4. OFICIOS DE DESIGNACIONES.pdf,*** corresponde al mismo archivo remitido en la respuesta inicial tocante a los noventa oficios de asignación de funciones.
3. Por su parte, el ahora **RECURRENTE** fue omiso en realizar manifestaciones que a su derecho conviniera y asistiera.
4. El **cinco de marzo del año en curso**, se amplió el término para resolver; al respecto este organismo garante no pasa por alto justificar, que la dilación en la resolución del presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos se ha incrementado el número de medios de impugnación que deben resolverse por este Instituto, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.
5. Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, dicha dilación es de carácter excepcional y se encuentra justificada en los elementos para medir la razonabilidad del plazo de resolución de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
6. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
7. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
8. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad de dicha dilación atendiendo a los siguientes criterios:
9. Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
10. Actividad Procesal del interesado. Acciones u omisiones del interesado.
11. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

1. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
2. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro *“TÉRMINOS* PROCESALES*. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ* INDEBIDAMENTE *POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”*, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
3. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
4. Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.
5. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.*

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.”*

1. Seguidamente, mediante acuerdo de fecha **once de marzo de dos mil veinticinco**, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y, ordenó la resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

## **PRIMERA. Competencia**

1. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones I, II, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1°, 8°, 9°, 10, 37 y 42, fracciones I, II y III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 2°, fracciones II y IV; 13, 29, 36, fracciones I y II; 176, 178, 179, 181 párrafo tercero, 185, 188 y 189 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 7°, 9°, fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## **SEGUNDA. Procedencia.**

1. Este Órgano Garante considera que el medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia toda vez que: el recurso fue presentado dentro del plazo establecido en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; asimismo no se tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de defensa presentado por el Recurrente ante otra instancia.
2. Por otro lado, es de suma importancia señalar que la parte recurrente no proporciona un nombre o datos de identificación como se advierte en el detalle de seguimiento del SAIMEX, no obstante lo anterior, no proporcionar el nombre completo no es motivo para archivar la solicitud de acceso a la información pública como concluida, conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establece lo siguiente:

*"****Las solicitudes anónimas****, con nombre incompleto o seudónimo* ***serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente****. No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante."*

1. Finalmente, el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la citada Ley de la materia, por lo que es procedente que este Instituto conozca y resuelva el presente recurso.

# **TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.**

1. Se solicitó tener acceso, a la información que a continuación se simplifica:
2. **Número de contratos de obra pública y de adquisición de servicios se llevaron del año 2021 a la fecha de la solicitud de información; y**
3. **Nombres, cédula profesional, oficios de asignación de tareas/funciones y, constancia de haber acreditado el procedimiento de evaluación de confianza ante la Secretaría de la Contraloría, de los servidores públicos que hayan tenido bajo su responsabilidad la residencia y/o la supervisión de obras públicas, y la revisión de precios unitarios.**
4. En respuesta, el **SUJETO OBLIGADO** remitió la información ya descrita en el párrafo 2. Inconforme con la respuesta, se interpuso recurso de revisión arguyendo de manera general la entrega de información incompleta.
5. En dichas condiciones, la controversia a resolver en el presente proveído, corresponde a determinar si se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 179, fracción IIde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado deMéxicoyMunicipios; fracción que determina las hipótesis relativa a la clasificación de la información; contexto del cual se dolió el Recurrente al momento de interponer su inconformidad. De modo tal que el presente recurso de revisión se abocará en determinar si el Sujeto Obligado con su respuesta ciertamente actualiza las causales de procedenciaseñaladas.

## **CUARTA. Estudio de la controversia.**

1. Determinado lo anterior; revisaremos la atención otorgada por el Sujeto Obligado a la solicitud que dio origen a este recurso, considerando imprescindible establecer lo que la regulación determina, por ello, en primer lugar, vamos a revisar lo que mandata nuestra Ley de Transparencia local, en su artículo 12, el cual establece que quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma, del mismo modo, el artículo 18 establece que los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.
2. Asimismo, es relevante mencionar que el artículo 19 del ordenamiento local de la materia señala que se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados y en caso de que dichas facultades no se hayan ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que motivaron tal circunstancia.
3. Los artículos antes citados, refieren que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano que abarca el solicitar, investigar, difundir y buscar información que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados, ya sea porque estos las generaron o la poseen en atención a sus funciones, por lo que se le considera un bien común de dominio público, toda vez que al tratarse de acciones ejercidas por un servidor público, este lo hace en representación del Estado, por lo que le pertenece a todos y debe ser accesible a cualquier persona, ya sea que los particulares la puedan consultar por encontrarse publicada en cualquier medio de difusión o porque la requieren a través de una solicitud de acceso a la información, siempre y cuando no encuadre en una de las excepciones contempladas por la ley.
4. Una vez sentado lo anterior, resulta oportuno señalar que los motivos de inconformidad resultan ciertamente ambiguos, por lo que a efecto de dar claridad a los solicitado e impugnado y determinar la procedencia o improcedencia, se precede a la realización del siguiente cuadro comparativo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Motivo de inconformidad** | **Respuesta** | **Procedencia** |
| *la información que me proporcionan no es legible. el listado de los servidores públicos que me proporcionan* | El único listado de servidores públicos que se entrega en respuesta, no corresponde a la totalidad de lo solicitado; sino únicamente de tres (aquéllos que cuenta con cédula). Asimismo no se advierte ningún listado de servidores públicos ilegibles. | Improcedente |
| *no me entregan la información que solicito de estas personas, omite el total de los servidores públicos que se encargan de la ejecución de las obras* | No se advierte en respuesta ningún listado de los servidores públicos que se requieren; no obstante estos pueden ser obtenidos de los oficios de designación entregados.  No pasa desapercibido que en calidad de informe justificado se remite un listado *ad hoc* con los nombres de los requeridos. | Improcedente |
| *por la parte donde dice la DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PERSONAL que no es un procedimiento oficial, le doy la razón pues es evidente que quien debe de solicitarlo es la persona que le designa las tareas de residente, siendo este la para esa subdirección o la dirección de obra, por lo que acuso al responsable de realizar la búsqueda exhaustiva de no haberla realizado porque tuvo que haber girado oficio a todos los que pudieran tener algún indicio de la información, que de manera obvia es el lugar de adscripción de estos servidores públicos que se les encomienda la tarea de residentes.*  *…*  *requiriendo la infromación que solicito ante a quien resulte responsable de ocultar de manera ventajosa mi requerimiento.* | Se informa que el procedimiento de evaluación de confianza, no es un procedimiento oficial al interior de esa Dirección, por lo que no obran constancias de las requeridas en sus archivos conforme a lo solicitado.  En calidad de informe justificado, se señala que ningún área del Sujeto Obligado genera esa información y en todo caso deberá solicitarlas a la Secretaría de la Contraloría por ser el ente que las genera. | Parcialmente procedente |

1. Despejado lo anterior, se advierten diversos aspectos. El primero de ellos que no se impugna la totalidad de lo solicitado; sino únicamente lo relativo al total de servidores públicos residentes de obra por contrato y de responsables de precios unitarios relativos a los contratos de obra pública de 2021 a la fecha de la solicitud y, a las constancias de evaluación de confianza.
2. Primeramente es necesario señalar que el particular no impugnó la totalidad de rubros que conforman la solicitud de información, por lo que en el recurso de revisión se observa que no inconforma por el contenido de la respuesta, solamente se inconforma por el procesamiento de la misma, por lo que el contenido de la información se tiene como actos consentidos, de tal forma que, la parte de la solicitud que no fue impugnada debe declararse consentida, toda vez que al no realizar manifestaciones de inconformidad; no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado, ya que no realizó manifestación alguna al respecto.
3. Sirve de sustento, la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

***“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”*

1. De la interpretación del criterio antes citado, se advierte que cuando el particular impugnó la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, no expresó razón o motivo de inconformidad en contra de todos los rubros solicitados, por tanto estos deben declararse atendidos, pues se entiende que **EL RECURRENTE** está conforme con la respuesta proporcionada por **EL SUJETO OBLIGADO,** al no contravenir la misma.
2. Atento a ello, es importante traer a contexto la Tesis Jurisprudencial Número 3ª./J.7/91, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que establece lo siguiente:

***“REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.*** *Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.”*

1. Dicho lo anterior, del cuadro elaborado, se advierte que los tres rubros se tienen por improcedentes por las siguientes consideraciones. El primero de ellos que como se señaló no se advierte ningún listado de servidores públicos ilegible y, el remitido que corresponde a aquellos servidores públicos de los que se localizó su cédula profesional, por lo que no hay un hecho que pueda establecer una *Litis* al respecto.
2. Seguidamente, el hoy **RECURRENTE** se duele por la omisión del total de servidores públicos que se encargan de la ejecución de obras a lo que ciertamente no se advierte un listado al respecto; sin embargo es de recordar que los sujetos obligados no están compelidos a generar documentos *Ad Hoc* para satisfacer las pretensiones de los solicitantes **conforme a sus intereses particulares**.
3. Como apoyo a lo anterior, es aplicable por analogía el **Criterio 03/17**, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que a la letra dice:

***“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.*

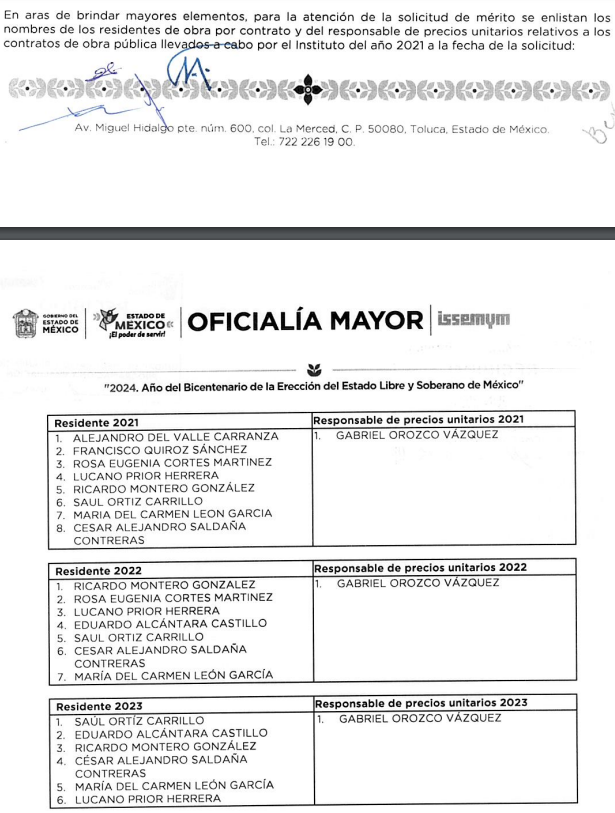
1. Así las cosas, de lo anterior, se desprende, que la información generada, obtenida, adquirida, transmitida, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, será accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información.
2. Por su parte, el artículo 12, de la Ley de la materia establece que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información que generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven, y sólo facilitarán las que se les requiera y obre en sus archivos, en el estado en el que se encuentre, sin la obligación de generarla, resumir, efectuar cálculos o practicar investigaciones; tal y como se señala a continuación:

*“****Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.****”*

Énfasis añadido

1. En síntesis, el derecho de acceso a la información pública se satisface en aquellos casos en que se entregue el soporte documental en que conste la información pública. Asimismo, el artículo 24, de la Ley de la materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el derecho de acceso a la información pública.
2. En ese sentido, si bien el **SUJETO OBLIGADO**, no generó un listado con las pretensiones particulares del solicitante; también lo es que remitió el soporte documental donde constaban o se advertían los nombres, a saber los oficios de designación. Luego entonces deviene inoperante el motivo de inconformidad al haberse colmado desde el inicio la solicitud de información.
3. No obstante lo anterior, no pasa desapercibido que en un hecho posterior a la interposición del recurso de revisión como lo es la etapa de manifestaciones, el **SUJETO OBLIGADO** con el ánimo de colmar la reclamación del solicitante, aun y cuando no se encontraba obligado, tuvo a bien generar el listado *Ad Hoc*, como se observa:



1. Por otro lado, si bien es cierto no se advierte información del ejercicio 2024; también lo es que el **SUJETO OBLIGADO** fue enfático en establecer que es la información que obra del año 2021 a la fecha que se da contestación. Al respecto, es de explorado derecho que este Órgano Garante no se encuentra facultado para dudar de su veracidad de la información que le fue entregada al hoy **RECURRENTE** en el presente asunto, ni de las respuestas, ni de las documentales que ponen a disposición de los solicitantes los sujetos obligados, situación que se aleja de las atribuciones de este Instituto *máxime* que al momento que ponen a disposición ésta, la misma tiene el carácter oficial y se presume veraz, tan es así que la misma queda registrada en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).
2. Así como lo dispuesto por la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del** Estado **de México y Municipios** en su artículo 3, el cual establece que la información pública generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones, será accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información, por lo que deberán apegarse en todo momento a los criterios de publicidad, veracidad, oportunidad entre otros, numeral en comento que a la letra señala:

*Artículo 3.- La información pública generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados en ejercicio de sus atribuciones, será accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información.* ***Los Sujetos Obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.***

1. Numerales que compelen al **SUJETO OBLIGADO** apegarse en todo momento a los criterios ya expuestos, impidiendo a este Órgano Colegiado cuestionar la veracidad de la información.
2. Finalmente, deviene el punto relativo a las constancias de haber acreditado el procedimiento de evaluación de confianza ante la Secretaría de la Contraloría, de los servidores públicos que hayan tenido bajo su responsabilidad la residencia y/o la supervisión de obras públicas, y la revisión de precios unitarios.
3. Al respecto el **SUJETO OBLIGADO** se informa que el procedimiento de evaluación de confianza, no es un procedimiento oficial al interior de esa Dirección, por lo que no obran constancias de las requeridas en sus archivos conforme a lo solicitado.
4. A lo que el particular se conformó por la falta de búsqueda exhaustiva y razonable y la falta de turno a otras áreas que de acuerdo a sus funciones y atribuciones, eventualmente cuenten con lo solicitado.
5. Contexto que resulta procedente ya que si bien no es un procedimiento de la Dirección que emite la respuesta, ello no implica que se puede contar con el soporte documental requerido; al ser evidente que la solicitud no versa respecto de los procedimientos de esa unidad administrativa.
6. Seguidamente en calidad de informe justificado el **SUJETO OBLIGADO** abunda más en su contestación, señalando que en todo caso el particular debe dirigir su solicitud de información a la Secretaría de la Contraloría por ser quien la genera. Contexto que también se desestima, ya que si bien es cierto es quien lo genera, no implica que el **SUJETO OBLIGADO** la posea y administre; recordando que el derecho de acceso a la información pública versa respecto del soporte documental que los sujetos obligados en uso de sus funciones y atribuciones de derecho público generen, posean o administren.
7. Ahora bien, respecto de las constancias de haber acreditado el procedimiento de evaluación de confianza ante la Secretaría de la Contraloría, corresponde a la actuación que las personas servidoras públicas llevan a cabo en apego a los principios institucionales, que se requieran para un debido ejercicio del servicio público Estatal, Municipal u Otro Poder del Estado, **conforme a los perfiles de puesto validados por la Dependencia que lo solicitó**, con la finalidad de fomentar la ética en el empleo, cargo o comisión que desempeñan y previniendo conductas irregulares o actos de corrupción.
8. En ese sentido los servidores públicos que se encuentran sujetos a evaluación son diversos de acuerdo a sus funciones, sin embargo de acuerdo al caso concreto son los siguientes:

* **Aquellos que tengan bajo su responsabilidad la residencia y supervisión de obras públicas, la revisión de precios unitarios, alzados y mixtos.**

1. Lo anterior de conformidad al **Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea La Unidad Estatal de Evaluación de Confianza**, de fecha quince de julio de dos mil veintidós, en su Acuerdo Séptimo fracción V, Octavo fracciones I, II, III, IV y Noveno fracciones IV y V, como se observa:

*SÉPTIMO.* ***Serán sujetos de Evaluación de Confianza las Personas Aspirantes y personas servidoras públicas de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de México****, que tienen la obligación de presentar las Evaluaciones de Confianza, cuando desempeñen empleos, cargos o comisiones relacionados con las funciones o actividades siguientes:*

*…*

*V.* ***Residencia y supervisión de obra pública, revisión de precios unitarios, alzados y mixtos, en términos del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México****;*

*…*

*OCTAVO. Las Personas Aspirantes y personas servidoras públicas obligadas deberán presentar la Evaluación de Confianza en los casos siguientes:*

*I. Por Ingreso;*

*II. Reingreso;*

*III. Promoción, y*

*IV. Por Permanencia, supuesto en el que se presentará la evaluación cada dos años.*

*NOVENO. Para el cumplimiento de su objeto, la Unidad tendrá las atribuciones siguientes:*

*...*

*IV. Coordinar acciones con las Dependencias y Organismos Auxiliares de los órdenes federal, estatal y municipal, así como con los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos y Ayuntamientos que permitan el cumplimiento de su objeto;*

*V. Coordinar la celebración de convenios de colaboración para realizar la Evaluación de Confianza a las Personas Aspirantes y personas servidoras públicas de los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos y Ayuntamientos, a solicitud de los mismos;*

*…”*

1. De lo anterior se concluye, que la Evaluación de Confianza es un proceso que se aplica a las personas aspirantes y a las personas servidoras públicas dentro de las Dependencias y Organismos Autónomos y Auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de México, lo que incumbe al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con el objetivo de garantizar que cuentan con la integridad, idoneidad y confiabilidad necesarias para desempeñar determinadas funciones públicas, que incluyen aquellos que tengan bajo su responsabilidad la residencia y supervisión de obras públicas, la revisión de precios unitarios, alzados y mixtos.
2. Ahora bien, dicho procedimiento consiste en la aplicación de una serie de evaluaciones cuantitativas y cualitativas, que se realizarán a las personas servidoras públicas obligadas, **conforme a los perfiles de puesto validados por las Dependencias que solicitan la evaluación de confianza**, misma que está conformada por las evaluaciones siguientes:

* Médico-toxicológica.
* Psicológica.
* Investigación socioeconómica.
* Poligráfica.

1. Como se advierte, la evaluación está integrada por múltiples datos personales sensibles eminentemente confidenciales; sin embargo es de recordar que el hoy **RECURRENTE** solicitó constancia de acreditación, que equivale a la *constancia de confianza*, documento que es el emitido por la Secretaría de la Contraloría una vez aprobada la evaluación, la cual ciertamente es susceptible de ser entregado de ser el caso en versión pública. Sirve de criterio **orientador,** el reiterado **06/24** de este Instituto en materia de seguridad pública, a saber:

***“RESULTADO GLOBAL DE EVALUACIONES DE EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA. DOCUMENTO DE CARÁCTER PÚBLICO.*** *El resultado de los procesos de cada etapa y los expedientes respecto a las evaluaciones de control de confianza, son confidenciales; sin embargo, será público el resultado global correspondiente a que el servidor público haya “Aprobado” o “No Aprobado” la evaluación, pues es de interés público conocer si los servidores públicos contratados cumplen con los requisitos legales para el ingreso y permanencia en el servicio público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 109, de la Ley de Seguridad del Estado de México.”*

1. Además, es de referir que es de interés público de la ciudadanía, conocer que los trabajadores gubernamentales cumplen con todos los requisitos establecidos en la normatividad respectiva, sobre todo, en materia de seguridad pública, pues sólo así, se puede saber, si los empleados señalados, **son aptos para ocupar determinados puestos;** toma relevancia dicha situación, al tratarse, en el presente caso de, cargos de la supervisión de obras públicas, la revisión de precios unitarios.
2. Asimismo, la publicidad de la información ayuda a rendir cuentas a la población, respecto a que el **SUJETO OBLIGADO** cumple con lo establecido en los ordenamientos jurídicos, ya que permite a las personas verificar que dicho instituto de salud, contrata a servidores públicos capaces e idóneos para cumplir con sus funciones y cumplen con los requisitos respectivos, sobre todo, si se trata de la supervisión de obras públicas, la revisión de precios unitarios.
3. Dicha evaluación efectivamente es ejecutada por la de la **Unidad Estatal de Evaluación de Confianza**, que es el órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, con autonomía técnica para el ejercicio de sus atribuciones y tendrá por objeto aplicar los procedimientos de evaluación de confianza y expedir la Constancia de Confianza que corresponda y se realiza en cuatro diferentes momentos como lo son ingreso, reingreso, promoción y permanencia (2 años), lo anterior de conformidad al Reglamento Interior de la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza, como se advierte:

*“Artículo 7. La persona titular de la Unidad tendrá las atribuciones siguientes:*

*…*

*II. Emitir las Constancias de Confianza a las Personas Aspirantes o personas servidoras públicas, que acrediten la Evaluación de Confianza;*

*…”*

1. Empero, no debe perderse de vista que en estricto sentido solicito la constancia de haber acreditado, es decir los resultados; al respecto el Reglamento de referencia establece que posterior a la evaluación se emitirá un resultado final, como se observa:

*“Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento, además de las definiciones establecidas en el Acuerdo por el que se crea la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza, se entenderá por:*

*…*

*VII. Resultado Final: Al documento que contiene el análisis y valoración conjunta e integral de las evaluaciones de confianza practicadas, en el que se deja constancia del resultado de la Evaluación de Confianza, en el que se determina si la persona sujeta a evaluación* ***Cumple, Cumple con Restricción o No Cumple****.”* Énfasis añadido

1. Como se observa, para determinar si una persona sujeta a evaluación cumple, cumple con restricción o no cumple, es necesario analizar los criterios específicos establecidos para la evaluación; como lo es que el evaluado cumple con todos los requisitos o estándares establecidos sin ninguna observación o limitación y, por tanto no hay restricciones o condiciones adicionales aplicables.
2. Cumple con Restricción, que se colige corresponde aquellos supuestos, en los que el evaluado cumple parcialmente con los requisitos, y existen ciertas limitaciones, por lo que pueden existir observaciones que impiden el cumplimiento total, y que eventualmente deben ser atendidas.
3. Finalmente, que no Cumple; es decir que el servidor público evaluado no alcanza los requisitos o estándares mínimos establecidos o que existen deficiencias significativas que impiden el cumplimiento de lo evaluado.
4. Dicho lo anterior es necesario traer a colación el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en sus siguientes preceptos:

*“Artículo 3.- Para los efectos del presente reglamento, se entiende por:*

*…*

*XXXV.* ***Residente de obra****: servidor público responsable de verificar que la ejecución de los trabajos se efectúe conforme al contrato.*

*…*

*XL.* ***Supervisor de obra****: es el servidor público o persona que auxilia al residente de obra para verificar que la ejecución de los trabajos se realice conforme al contrato.*

*…*

*Artículo 215.- Para dar inicio a la ejecución de los trabajos,* ***el contratante nombrará al servidor público residente de obra****; y el contratista, al superintendente de la obra que lo representará. Cuando la supervisión sea contratada con terceras personas, es conveniente que participe desde el fallo del procedimiento de adjudicación del contrato de obra.*

*Artículo 216.-* ***Para designar al residente de obra****, el contratante deberá prever que tenga los conocimientos, experiencia, habilidades y capacidad suficiente para administrar y dirigir los trabajos; considerando la formación profesional, la experiencia en administración y construcción de obras, el desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hará cargo.*

***Para acreditar esto el servidor público designado deberá presentar la certificación de conocimientos y habilidades expedida en la materia.***

*El contratante podrá ubicar la residencia o residencias de obra en la zona de influencia de la ejecución de los trabajos.”*

1. Como se observa, la designación del residente de obra es un aspecto importante en la ejecución de proyectos de obra, ya que esta persona será responsable de administrar, supervisar y dirigir los trabajos en el sitio y, para garantizar que el residente de obra cuente con las competencias necesarias, el contratante debe evaluar y asegurar que cumpla con los requisitos que marca la Ley de la materia como lo es un análisis riguroso de sus conocimientos, experiencia y habilidades y, de ser el caso verificar que el residente de obra cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones o bases de licitación; luego entonces ciertamente resulta procedente el argumento relativo a la falta de búsqueda exhaustiva y razonable en las áreas que de acuerdo a sus facultades y competencias, eventualmente cuenten con lo solicitado como lo es de manera enunciativa mas no limitativa es la **Dirección de Obras y Control Patrimonial** a la que se encuentra adscrita la **Subdirección de Obras y Mantenimiento** y el **Departamento de Conservación y Mantenimiento de Bienes muebles e Inmuebles,** cuyas facultades y atribuciones de acuerdo al **Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios,** son la de planear, organizar, coordinar y controlar la obra pública, así como el mantenimiento de bienes inmuebles del Instituto, que coadyuven en el funcionamiento y cumplimiento de las metas del organismo.
2. Por lo que ciertamente, deberá realizarse una nueva búsqueda exhaustiva y razonable de lo solicitado. Al respecto, el procedimiento de acceso a la información pública, descrito en el Título Séptimo de la Ley de Transparencia describe los pasos que debe seguir la autoridad para atender las solicitudes que presenten las personas en ejercicio de su derecho, entre los cuales se encuentra el deber de las Unidades de Transparencia de turnar a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, según se asienta en el artículo 162 de la ley citada.

***“Artículo 162.*** *Las unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.”*

1. El buscar exhaustivamente en sus archivos, es identificar la unidad(s) administrativa(s) que resguarda el documento al que una persona pretende acceder, es practicar una adecuada gestión documental que nos permite localizar el documento, como bien señala el artículo 159 de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad y, si para el caso de la nueva búsqueda exhaustiva y razonable no se localizara soporte documental al respecto, bastará que lo haga del conocimiento del solicitante al momento de dar cumplimiento al presente proveído por no corresponder a un requisito del perfil de puesto.
2. Finalmente no pasa desapercibido que el ahora **RECURRENTE** en su escrito de inconformidad, vertió diversas manifestaciones subjetivas, a saber:

*"...yo como superintendente tuve asignados otros residentes, de los cuales tengo duda que hayan pasado un control de confianza derivado de sus prácticas, mismo que se podrá corroborar revisando la firma de las bitácoras de obra del total de los contratos adjudicados en la temporalidad que solicito. así como también se podrá corroborar preguntando en la dirección y subdirección a la que pertenece la ejecución de las obras a cargo el issemym.*

*…*

*me he visto en situaciones donde me he sentido vulnerado por la figura del residente, me he sentido que han querido sacar ventaja de la condición que tienen, incluso dañado por sus omisiones en el desempeño de sus funciones hasta denotar que requieren un incentivo*

*…*

*requiriendo la infromación que solicito ante a quien resulte responsable de ocultar de manera ventajosa mi requerimiento."* (Sic)

1. Las cuales, son inobservables para este Órgano Garante por no corresponder al ejercicio del derecho de acceso a la información pública; sino que corresponden a manifestaciones subjetivas, que corresponden aquellas expresiones, percepciones o experiencias internas de una persona que no pueden ser directamente observadas o medidas por otros y son propias del individuo y están influenciadas por sus emociones, pensamientos, creencias y experiencias personales. Luego entonces, se insiste en su improcedencia para efectos de la resolución de la *Litis*.
2. Con la determinación anterior quedará por colmado el derecho de acceso a la información del ahora Recurrente; toda vez que el Derecho que tutela este Órgano Garante corresponde a la *igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información[[1]](#footnote-1) en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los* poderes *Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal*[[2]](#footnote-2)que se constituye como una herramienta fundamental para *ejercer control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas,[[3]](#footnote-3)*fomentando *la transparencia de las actividades estatales y* promoviendo *la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública[[4]](#footnote-4)* que permite *saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.[[5]](#footnote-5)* ”
3. Para entender los alcances de la información pública se considera importante citar el criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno” el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto dispone:

***“CRITERIO 0002-11***

***INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN TEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3, 4,11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

1. El derecho de acceso a la información encuentra su materia elemental en los documentos, y la Ley de Transparencia local nos brinda el siguiente concepto, para darnos un mejor panorama:

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien,* ***cualquier otro registro*** *que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;*

1. Es así que, todos los actos de autoridad que realicen los Sujetos Obligados **deben estar** documentados y, bajo el más alto estándar de transparencia deberán poner toda la información que se encuentre en su posesión, a disposición de los particulares que la soliciten.
2. Además, debemos tomar en cuenta los artículos 4 y 12 (antes transcrito), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales establecen lo siguiente:

***“Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información*** *generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o* ***en posesión de los sujetos obligados es pública*** *y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

*Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.”*

1. Es así que, por un lado se tiene la obligación de documentar todos los actos que se lleven a cabo en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias, mientras que por otro, se ven impuestos por la obligación de hacer pública toda aquella información que se encuentre en su posesión en estricto apego a los principios de eficacia[[6]](#footnote-6) y máxima publicidad, sobre éste último se debe poner mayor énfasis, puesto que establece que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, completa, oportuna y accesible, lo que permite que la ciudadanía tenga un amplio acceso sobre lo que es el actuar de las autoridades.
2. Robustece lo anterior la Tesis aislada identificada con la clave I.4º.A.40 A del Cuarto Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta en el libro XVIII, Marzo 2013, Página 1899.

***ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.*** *Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa. “*

**QUINTO. De la versión pública.**

1. Derivado de la naturaleza de la información es hacedero que eventualmente contenga datos personales susceptibles de clasificar mediante una versión pública, como justamente fuera solicitado por el particular. Ello es así ya que la excepción de publicidad, es aquella información que tenga el carácter de confidencial (datos personales), por lo que debe privilegiarse el acceso a la información bajo el principio de máxima divulgación, empero sin violar el derecho a la intimidad por medio de la protección de datos personales, por ende de la información que se ponga a disposición, su entrega deberá ser en versión pública; referencia cuyo fundamento legal aplicable se encuentra inmerso en los numerales de la Ley de la materia, que a la letra esgrimen:

***Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:***

***[…]***

***IX. Datos personales:*** *La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***[…]***

***XLV. Versión pública:*** *Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

***Artículo 122.*** *La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente título.*

*[…]*

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

*[…]*

***II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o***

***Artículo 137. Cuando un mismo medio, impreso o electrónico, contenga información pública y reservada o confidencial, la Unidad de Transparencia para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.”***

(Énfasis añadido)

1. Los acuerdos de clasificación deberán contener un razonamiento lógico en que se demuestre que la información se encuentra en una de las hipótesis previstas en la ley, si bien es cierto cuenta con los requisitos mínimos que debe contener un acuerdo de clasificación, también es cierto que debe estar debidamente fundado y motivado, sirve de apoyo lo siguiente:

***“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.*** *La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.*

1. Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho.
2. En consecuencia, la fundamentación y motivación implica que, en el acto de autoridad, además de contenerse los supuestos jurídicos aplicables se expliquen claramente por qué a través de la utilización de la norma se emitió el acto.

1. Luego entonces, no pasa desapercibido para este Órgano Garante que los sujetos obligadosserán responsables de los datos personales en su posesión y que, en caso de localizarse datos concernientes a terceros, éstos no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales. Cabe destacar que, para la realización de la clasificación de la información, se deben seguir una serie de pasos y procedimientos, por lo que es menester reiterar los mismos:

|  |  |
| --- | --- |
| **a) Requisitos previos.** | Los artículos 100 y 122 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que si los Sujetos Obligados determinan que la información actualiza alguno de los supuestos de clasificación, es deber de los titulares de las áreas proponer su clasificación y no del Comité de Transparencia.  Al hacerlo tienen que precisar de qué información se trata, señalando el supuesto de clasificación (confidencialidad o reserva).  Además, se debe señalar el procedimiento, de los tres que establecen los artículos 132 y 106 de la Ley Estatal y General, respectivamente.  El último de estos requisitos previos consiste en que no se pueden emitir acuerdos de carácter general ni particular, esto es, no se puede hacer un acuerdo para clasificar de manera general todos los documentos de un expediente o área, sin individualizar su análisis y tampoco se puede hacer un acuerdo por cada dato que se vaya a clasificar dentro de un documento con diez datos, por ejemplo, susceptibles de ser clasificados. |
| **b) Supuestos de clasificación.** | Las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.  Los artículos 116 y 143 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan los supuestos para que la información pueda ser clasificada como confidencial. Mientras que los artículos 105 y 130 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que la aplicación de estos supuestos debe realizarse de manera restrictiva y limitada, por lo que debe acreditarse que se cumple con esta condición y no se pueden ampliar las excepciones o supuestos de clasificación aduciendo analogía o mayoría de razón.  El **Sujeto Obligado** debe identificar claramente el tipo de información y hacer un juicio de subsunción o encaje para acreditar que el supuesto de hecho corresponde estrictamente con la hipótesis jurídica. Esto también lo debe de realizar el servidor público habilitado y el titular del área que administra la información. |
| **c) Formalidades para emitir el acuerdo de clasificación.** | El Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos cuenta con las facultades para aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información que haya propuesto.  Es necesario que **el acto reúna con los requisitos elementales**, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la legalmente facultada para ello.  La decisión de aprobar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo propuesto por el Titular del I. El área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones, se insiste, a partir de las decisiones adoptadas previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia, por el Comité de Transparencia. |
| **d) Requisitos de fondo del acuerdo de clasificación.** | Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho y la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro. Ahora, en esta parte del procedimiento, que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la ley señala que la carga de la prueba, para justificar las restricciones, corresponde a los **Sujetos Obligados**, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación.  De lo anterior, se desprende que para una correcta **clasificación total o parcial**, esto es determinar los datos que se suprimen en las versiones públicas, es necesario fundar y motivar, de manera correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.  Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.  En ese mismo sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.  Ahora bien, **para cada caso además de fundar y motivar**, se debe identificar con claridad qué datos contenidos en las documentales que son susceptibles de suprimirse, por ejemplo; Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), claves de seguros, préstamos o descuentos personales, secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, entre otros. |
| **e) Condiciones especiales de la clasificación de la información como confidencial.** | Los artículos 148 y 120 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, establecen que aun tratándose de datos personales, se podrán proporcionar, incluso sin solicitar el consentimiento de su titular.  En el caso de lo señalado en la fracción IV, será el Instituto quien deba aplicar la prueba de interés público, considerando también que como recientemente ha discutido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los servidores públicos nos encontramos sujetos a un régimen menor de protección.  Pero si la información que se pretende clasificar como confidencial no se encuentra en los supuestos de los artículos señalados y es posible, se deberá consultar al titular de los datos si permite o no el acceso. De no ser posible, la realización de la consulta, procede, fundando y motivando, la clasificación. |

1. Si el servidor público incumple con estas formalidades y entrega la información sin proteger los datos personales incumple con lo que estipula las disposiciones legales establecidas; asimismo que si entrega un documento testado sin el debido acuerdo de clasificación.
2. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes:

**R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO**. Resultan parcialmente fundadas lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer en el Recurso de Revisión **03813/INFOEM/IP/RR/2024,** en términos de los **Considerandos** **CUARTO** y **QUINTO** de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se **MODIFICA** la respuesta emitida por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipiosy se **ORDENA** entregar vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), de ser el caso en versión pública, previa búsqueda exhaustiva y razonable, la siguiente información:

1. **Resultado final o resultado de la Evaluación de Confianza, de los servidores públicos con responsabilidad de residencia y supervisión de obras públicas, la revisión de precios unitarios, alzados y mixtos, del 1 de enero de 2021 al 14 de mayo de 2024.**

Para efectos de lo anterior, se deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracciones II y VIII, 132, fracción II y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre la eliminación de los datos y documentos confidenciales del soporte documental respectivo objeto de las versiones públicas que se formulen y se pongan a disposición del **RECURRENTE**.

Para el caso que el **SUJETO OBLIGADO** no cuente con la información que se ordena, bastará que lo haga del conocimiento del **RECURRENTE** al momento de dar cumplimiento a la presente Resolución en términos del artículo 19 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**TERCERO. Notifíquese** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado vía SAIMEX, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; **dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles,** e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **SUJETO OBLIGADO** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente Resolución.

**QUINTO.** Notifíquese al **RECURRENTE** la presente Resolución, vía **SAIMEX**.

**SEXTO.** Se hace del conocimiento del **RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnar vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE (12) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto, sección A, Fracción I. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C. No. 151. Párr. 86. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibídem. Párr. 87. [↑](#footnote-ref-4)
5. Declaración conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004), disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Artículo 9. …

   II. Eficacia: Obligación del Instituto para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;

   … [↑](#footnote-ref-6)